

La recaída de una crisis

Al concluir el periodo de gobierno del licenciado Luis Echeverría, el pasado mes de noviembre, era *vox populi* el achacar a la administración feneciente la responsabilidad del proceso inflacionario que padecía el país, el cual empobrecía gradualmente a grandes sectores de la población, hacía decaer los negocios privados del país, generando desempleo, congelamiento de los salarios y aumentos a los precios de artículos de consumo básico.

La medida oficial, realizada por el gobierno de Echeverría, de devaluar la moneda mexicana, al tiempo que agravó aún más el proceso inflacionario, deterioró la escasa confianza que gozaba el régimen entre los sectores populares. La mayoría de la población, desesperada por la acumulación de tantos males económicos, no veía ya el momento en que concluyera el periodo de gobierno echeverrista, y el inicio de uno nuevo que promoviese la recuperación económica.

Tanto el hombre de la calle como la mayoría de los empresarios coincidían en criticar a Echeverría por haber abandonado bajo su gobierno, el tradicional proyecto de crecimiento económico, denominado "del Desarrollo Estabilizador", el cual, durante más de veinte años de régimen político, había demostrado sus virtudes bienhechoras a la economía nacional, trayendo bonanza a los negocios; creando una situación de estabilidad monetaria que atrajo al país grandes volúmenes de inversiones extranjeras.

Esta política de fomento al empleo y nulo crecimiento en los precios de las mercancías habría sido abandonada, según estas opiniones, a causa de la irresponsabilidad e incapacidad de Echeverría como gobernante. Esta insuficiencia en el manejo de los cargos de gobierno al tiempo que se haría también una extensiva a todo el grupo de colaboradores del presidente, explicaría el por qué de los múltiples conflictos entre la iniciativa privada y el gobierno y el agudizamiento de sus diferencias.

Así, en un momento de crisis coyuntural en que la economía internacional afectaba las exportaciones del país y reducía la producción nacional, el gobierno de Echeverría en lugar de haber abandonado su política de hostilización a los intereses privados, ahondó más en ella, a través de ampliar las inversiones públicas, creando enormes empresas del Estado que rivalizaban, de una manera u otra, con los negocios de particulares, al igual que retiraba muchos de los tradicionales subsidios económicos a empresas privadas; generando, con todo ello, la desconfianza entre los hombres de negocios sobre la buena voluntad del gobierno para resolver los problemas del país; dando origen al proceso de huida de capitales al extranjero.

De esta forma la reticencia de los empresarios a invertir hizo casi nulo el crecimiento económico del país y retrajo la producción nacional, generándose con ello un progresivo aumento en los precios y en el desempleo.

Supuestamente, a partir de esta situación el gobierno se vio obligado a sustituir las inversiones privadas con inversiones públicas, endeudándose para ello con grandes cantidades de dinero proveniente del extranjero e incurriendo en una política de emisión de billetes sin su consiguiente respaldo en la producción de mercancías. De esta forma el mercado nacional se vio de pronto inundado de enormes volúmenes de circulante monetario, los cuales no tenían respaldo en valores comerciales, dando lugar con ello a la especulación y al aumento de precios en las mercancías. Al mismo tiempo, la entrada al país de grandes cantidades de moneda fuerte del exterior, por concepto de los préstamos públicos, en una situación de baja de la producción interna, fomentó aún más esta escalada de precios, consolidándose así el proceso inflacionario nacional, que generó círculos viciosos, con la retracción de capitales, baja en la producción y aumentos en los precios, sucesivamente.

Según la opinión mayoritaria de la gente, durante el último mes del pasado año la falta de sensibilidad política de los dirigentes echeverristas para resolver las agudas diferencias entre la iniciativa privada y el gobierno y su profunda irresponsabilidad al ahondar en ellas, a través de intentar sustituir al capital privado con el capital público, dio origen, finalmente, a una huida masiva de capitales y salida de divisas del país, que agotó las reservas monetarias del Banco Central, dando lugar a la devaluación del peso en diciembre pasado.

La pérdida en valor de la moneda mexicana fue consecuencia lógica de la actitud intransigente del gobierno; por lo menos, éste es el argumento que dieron los empresarios que sacaron su dinero del país provocando la devaluación, como justificación a su acto. La culpa no fue de ellos, señalan, sólo fueron simples víctimas del proceso generado por el gobierno de Luis Echeverría.

De esta idea puede inferirse la validez del argumento tan difundido a partir del 10. de diciembre pasado, sobre la necesidad de la reconciliación nacional y la tregua solicitada por los empresarios privados del país, para dar fin a los desacuerdos entre la iniciativa privada y el sector público, devolviendo la confianza a los empresarios a invertir, sobre la garantía de que el nuevo gobierno abandonará su agresiva política de inversiones estatales y, aún más, retraerá el gasto público a nivel tal que se reduzca el consumo de la mayoría de la población, para detener con ello la inflación en los precios.

La tregua solicitada por los empresarios privados, inclusive, va más allá de este acuerdo con el gobierno y abarca, también, al sector obrero del país, a quien se le solicita, por intermedio de los dirigentes sindicales, reducir sus demandas salariales al mínimo y aumentar la productividad del trabajo al máximo, con vías a fomentar la creación de mercancías y hacer compatibles el enorme circulante monetario con un elevado monto de bienes de consumo.

La iniciativa privada pide, igualmente, una tregua o moratoria con el sector financiero externo, para poder pagar a largo plazo sus enormes adeudos contraídos en años pasados, que, por lo demás, son muy superiores en monto a los que adeuda el sector público con el extranjero.

En otros términos, la iniciativa privada pide un descanso en el proceso de la lucha de clases del país, suficiente para dar marcha atrás en la historia, rumbo a los años poscardenistas, periodo en el cual existía un grupo de privilegiados sociales y mimados por el gobierno: los inversionistas privados.

En torno a esta idea nos parece interesante comentar la validez del argumento sobre la necesidad de la tregua solicitada por los empresarios del país.

Al respecto diremos que en torno a los pasados desacuerdos entre la iniciativa privada y el gobierno de Echeverría, los cuales crearon una crisis de confianza entre los inversionistas, éstos tuvieron como causa principal la discrepancia consciente sobre proyectos distintos de desarrollo económico. Esto es, los desacuerdos entre los sectores público y privado siempre fueron claros e intencionales, y no producto de la incapacidad de uno de los dos sectores en pugna. La causa: dos maneras distintas de concebir las políticas del desarrollo económico del país.

Así el gobierno echeverrista, en contraposición a las ideas de un sector de empresarios, promovió una política de grandes inversiones públicas en apoyo a un tipo de inversiones privadas de gran tamaño, y que empleaban una tecnología sumamente avanzada, todo ello en detrimento de los tradicionales subsidios gubernamentales en apoyo a débiles y pequeñas inversiones privadas, hechas por sectores de empresarios que escasamente empleaban técnicas productivas avanzadas.

De igual forma la discrepancia intencional promovida por el gobierno, de restarle créditos bancarios a los empresarios, estaba destinada a disminuir la influencia económica de los capitales débiles y atrasados, que tradicionalmente se han identificado con las políticas conservadoras de gobierno.

En lo que toca a la política echeverrista de promover el aumento a los salarios y a los precios de los productos campesinos, la intención era que, conjuntamente a la elevación de los deprimidos niveles de vida de obreros y ejidatarios, existiera una redistribución de la riqueza en detrimento de los ingresos de las también conservadoras clases medias del país, al tiempo que desestabilizaban la rígida estructura de mercado que sólo beneficiaba a las industrias que operaban con altos costos de producción y baja calidad de las mercancías.

La respuesta de un enorme sector de empresarios ante la política de grandes inversiones públicas y aumentos salariales, fue aumentar los precios a sus mercancías, cayendo con ello en la trampa de fomentar, a su vez, la inflación promovida ya por el Estado.

La carrera de precios y salarios fue alentada por el gobierno con la importación de grandes volúmenes de monedas fuertes del extranjero, con la intención consciente de crear una inestabilidad monetaria y con ello mayores dificultades económicas al débil desarrollo de los capitales atrasados del país.

Si estamos de acuerdo con la interpretación marxista de las crisis capitalistas, de que éstas depuran al interior de los mercados a todos aquellos sectores productivos débiles y atrasados, quedando en cambio los sectores capitalistas avanzados altamente fortalecidos, podríamos decir que, de igual for-

ma, en el caso mexicano la crisis que padecemos desde hace algunos años, fue en lo posible estimulada por el Estado con el propósito de sanear nuestra economía de los sectores industriales ineficientes y obsoletos.

Y el hecho de que a la fecha, cinco meses después de concluido el anterior gobierno, los intentos tanto oficiales como privados por contrarrestar las causas de la crisis de recesión-inflación no hayan dado buenos resultados, y sí en cambio se haya fomentado el desempleo y el alza de precios, muestra el grado en que incidieron las reformas echeverristas en la economía mexicana.

Por otro lado, la reforma electoral propuesta recientemente por el gobierno y las amenazas de la CTM de romper con la tregua de los empresarios, como medidas destinadas a contener el descontento de las masas gradualmente empobrecidas, a causa de la inflación galopante que padecemos, sólo abrirán paso a la continuación de la crisis económica y a las reformas políticas, que era precisamente lo que el sexenio pasado buscaba con tanto denuedo.

12 de mayo de 1977

Javier Rosas